



E. CANDIA

Enfrentamientos entre bandas, disputas territoriales, venganzas o riñas a mano armada son algunas de las razones que explican las balaceras que han afectado a distintas comunas de la Región Metropolitana en los últimos meses, entre cuyas víctimas hay un sinnúmero de niños. Muchos de ellos resultan heridos —como el caso del adolescente de 16 años ocurrido hace un par de días en Huechuraba, en el que no se han reportado detenidos hasta ahora— y otros tantos muertos. La identificación de los responsables, cuando no hay testigos de los tiroteos o sobrevivientes, se dificulta, dicen entre los investigadores. Un año atrás, por ejemplo, hubo 12 asesinatos de niños en un mes y solo había detenidos en menos de la mitad de los casos. Este tipo de casos no es excepcional. “Mal Balance 2024 en Seguridad: Récord de crímenes violentos, baja prioridad presupuestaria y pendientes legislativos” es el nombre de un informe del centro de estudios Libertad y Desarrollo. El texto, mediante un seguimiento de una década, da cuenta del aumento de delitos violentos a nivel nacional, categoría compuesta por “homicidios, violaciones, robos con violencia y lesiones”.

A través de los índices del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), la organización pudo determinar que Carabineros reportó 196.379 de estos ilícitos en 2024, cifra superior a los 194.938 registrados en 2023. En retrospectiva, los delitos violentos vienen al alza —al menos— desde 2015, y para 2019 el catastro anual llegó por primera vez en los últimos 10 años analizados a superar los 190.000. A pesar de que durante el confinamiento de 2020 y 2021 los niveles descendieron a 148.242 y 126.030 ilícitos de agresividad considerable, ya en 2022 los casos declarados fueron 181.771.

■ Políticas y presupuesto insuficiente

Al respecto, desde Libertad y Desarrollo, Daniel Rebolledo advierte que “considerando que las políticas del Gobierno, como el plan ‘Calles sin violencia’ o la Política Nacional contra el Crimen Organizado, no han dado

Informe del centro de investigación Libertad y Desarrollo:

# Cifras de Carabineros dan cuenta de menos efectividad en detenciones ante aumento de delitos violentos

Datos analizados por la institución indican que este tipo de ilícitos superó los 190 mil por segundo año consecutivo. Expertos observan, entre otras cosas, una asignación de recursos estatales insuficientes.



**BALACERA.**— El 14 de enero pasado la fiscalía llegó hasta la población La Pincoya, Huechuraba, por el homicidio frustrado de un menor de 16 años en una balacera.

**CASOS**  
 Los datos de STOP consideran casos policiales, involucran denuncia y delitos en flagrancia.

los resultados deseados y que la prioridad presupuestaria de las actuales autoridades en materia de orden y seguridad es la más baja de, al menos, los últimos 20 años, se hace muy difícil que las tendencias se reviertan”.

El instituto sostiene la afirmación sobre el presupuesto en los Informes de Estadísticas de las Finanzas Públicas de los interva-

los 1987-2003; 2004-2013 y 2014-2023 y en una “proyección en base a Informe de Finanzas Públicas del Tercer Trimestre 2024, Ley de Presupuesto 2025 de la Dipres e IPoM de diciembre del 2024”. De esta manera, argumentan que el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric ha destinado un 5,8% en este orden. La cifra de menor volumen desde el 5,2% del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle entre 1994 y el 2000.

Por su parte, la académica de la Universidad San Sebastián (USS) Pía Greene comenta que “si bien la victimización puede

bajar, como muestra la Enusc (Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana: 21,7% y 21,8%, respectivamente), lo que hay que ver ahí es que la encuesta considera todos los delitos, violentos y no violentos”.

Aclarado lo anterior, Greene destaca como positiva la división de análisis de delitos violentos como objeto único de estudio. Sin embargo, lamenta que “las cifras del STOP son solo casos policiales”. Es decir, “que involucran la denuncia y los delitos en flagrancia” y, por tanto, “significa que hay una cifra negra del 40% aproximadamente”.

“Las políticas del Gobierno, como el plan ‘Calles sin violencia’ o la Política Nacional contra el Crimen Organizado, no han dado los resultados deseados”.

DANIEL REBOLLEDO  
 INVESTIGADOR DE LYD

“La baja en la efectividad policial tiene que ver con varias cosas, principalmente por el cambio en el fenómeno criminal, se ha vuelto mucho más complejo”.

PÍA GREENE  
 ACADÉMICA USS

■ Efectividad a la baja

Por otro lado, el informe de LyD también señala “respecto a la efectividad policial” que “durante el 2024 esta desciende a un 13%. Es decir, según los registros de Carabineros, por cada 100 delitos que ocurren en el país, solo 13 terminan con alguien detenido”. El porcentaje varía en consideración respecto de 2018, cuando la efectividad fue del 22%. En 2020 el registro ya daba cuenta de un descenso a 18 detenciones cada 100 delitos. Entre 2022 y 2023 el índice se mantuvo esta-

ble en 14%.

Rebolledo explica que “no hay una respuesta única para dar explicación a este retroceso. En el caso de los homicidios el aumento de los imputados desconocidos, producto del avance del crimen organizado, es una explicación, pero para el resto de los casos se conjugan otras variables como la falta de dotación en las policías y en el Ministerio Público”. Además, menciona que para “poder disminuir los delitos violentos” se necesitan “mayores recursos, mayor planificación y la aprobación de proyectos de ley que aún están pendientes, como el que propicia la especialización preferente de las policías, el que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado y el que regula las reglas del uso de la fuerza, entre otros”.

Por su parte, Greene plantea que “el hecho de que haya más recursos ciertamente es una contribución para que se pueda mejorar su trabajo, para actualizar tecnología, herramientas de trabajo, entre otros”. No obstante, “no es lo único que se requiere. Hay que focalizar el trabajo, actualizar la formación a la nueva forma de criminalidad que estamos viviendo, intensificar la capacitación en nuevas tecnologías y, por supuesto, mejorar la coordinación con otras instituciones con funciones y/o atribuciones con la seguridad”.

Greene también asevera que “la baja en la efectividad policial tiene que ver con varias cosas, principalmente por el cambio en el fenómeno criminal, se ha vuelto mucho más complejo”.